



Las Consecuencias Políticas de la inseguridad

Bertha García Gallegos*

Existen múltiples razones para que los agentes políticos de las naciones-partidos, líderes, movimientos políticos y ciudadanos- hoy en día, se interesen significativamente en los temas de la Seguridad / Inseguridad. Pero habitualmente no lo hacen a pesar de que la inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos. Cuando esos líderes o partidos ganan las elecciones y acceden al poder del gobierno, al manejo de las políticas públicas, o, en el caso de los congresistas a la representación de los ciudadanos, es difícil que puedan responder adecuadamente a los intereses y necesidades de sus electores.

Pero mucho más preocupante es el hecho que los líderes civiles cuando acceden al gobierno o a puestos de representación queden, precisamente en los temas de la Seguridad que ahora son mucho más complejos, a expensas del conocimiento y experticia de los militares, policías u otros cuerpos de seguridad a quienes, se supone, los políticos deben guiar, conducir y controlar. Policías, militares y cuerpos de seguridad son realmente especialistas en sus campos de acción, pero no conductores políticos. La visión y el discurso de los funcionarios civiles deben ser políticamente más estratégicos que la visión y discurso de quienes tienen que actuar frente a situaciones precisas, sin deliberar por las consecuencias políticas de una acción.

Las consecuencias políticas van más allá de las responsabilidades constitucionales. Es que realmente, la inseguridad produce ingentes problemas sociales, especialmente relacionados con la delincuencia, que se concatenan entre sí. Y en la medida en que los gobiernos civiles no sean capaces de hacerles frente, con eficacia, la legitimidad de la democracia irá cediendo frente al autoritarismo. La falta de fe pública puede llegar al clamor por un liderazgo "fuerte", dentro de un círculo vicioso en el que tal liderazgo fuerte lo único que hará es dar palos de ciego y descomponer todas las instituciones. Esto lo acaba de comprobar el estudio de la Universidad de Vanderbilt (proyecto LAPOP) de este año. Son preocupantes los rangos de población en América Latina que todavía están dispuestos a apoyar soluciones militares con la idea de que éstos resolverán los problemas de inseguridad y violencia.

Pero bien sabemos que ésta no es más que una quimera y muy pronto la memoria colectiva recordará las pavorosas situaciones producidas por las dictaduras militares. Además todos los días, en otros espacios de la región comprobamos que el uso indebido de la fuerza militar para combatir el crimen, aumenta la violencia antes que apaciguarla.

Por otra parte, de acuerdo con la constitución ecuatoriana, la conciencia política

sobre el tema de la Seguridad no solo tiene que ver con las tradicionales preocupaciones de la Defensa, Seguridad Pública o Ciudadana y desastres naturales, sino también con aquellos factores que amenazan y ponen en riesgo las condiciones de vida de las personas: Seguridad Alimentaria, Ambiental, Energética y el acceso al agua, son los nuevos temas que los estados han incorporado a sus obligaciones primordiales en el marco de la Seguridad porque las circunstancias que impiden su debida satisfacción son percibidos por las personas como amenazas para sus derechos fundamentales; si éstas no son atendidas debida y democráticamente pueden convertirse en factores de marginación, consecuentemente en violencias. En el Ecuador recientemente se ha elaborado una Ley de Seguridad en reemplazo de la Ley correspondiente de carácter militar que perduró por más de cincuenta años. Está todavía por evaluarse la efectividad de esa Ley y la estructura creada a partir de ella. Pero, a pesar de que la Constitución ha incluido los temas de Seguridad Humana, no se ha estructurado en la Ley el sistema correspondiente, sin el cual es difícil construir y ubicar, jurídica y políticamente, los parámetros de gestión adecuados en el contexto de una acelerada dinámica internacional en donde esos problemas traspasan límites temporales y espaciales.

* Socióloga; profesora de la PUCE y Directora del Proyecto Democracia, Seguridad y Defensa.

CONTENIDO

■ Editorial

Las consecuencias políticas de la inseguridad.

Bertha García

pág. 1

La institucionalidad emergente en la gestión gubernamental de la seguridad.

Lic. Roberto González

pág. 2

¿En qué circunstancias los ciudadanos tienden a apoyar soluciones autoritarias?

Orlando J. Pérez

pág. 4

Reportaje: Crisis mundial e incremento de la transferencia internacional de armas.

Bertha García Gallegos*

Sol Espinosa Villagómez

pág. 6

Observatorio político, defensa, seguridad pública y ciudadana

María Sol Espinosa

pág. 9

La Institucionalidad emergente en la gestión gubernamental de la seguridad.

Lic. Roberto González*

El concepto vigente de seguridad a partir del cual las instituciones de control social implementan sus estrategias de gestión, caracteriza el espacio público de manera dinámica ya que cada conceptualización tiene relevancia en tanto espacio de intervención civil, en una materia tradicionalmente restringida al conocimiento técnico que reposó tradicionalmente en los policías. Siendo la República Argentina un país federal, además de las fuerzas nacionales que tienen una intervención generalmente subsidiaria a nivel provincial, existen las Policías y Penitenciarías Provinciales, como órganos de gestión jurisdiccional en el área de seguridad. Este artículo, basado en un estudio comparativo sobre los sistemas de seguridad de varias provincias, busca establecer patrones y divergencias que puedan explicar provisionalmente la realidad diversa de la nueva lógica, compleja y participativa, en el área de seguridad en Argentina.¹

1. Federalismo y Seguridad en Argentina.

El sistema federal, como mecanismo de ordenamiento y administración territorial ha sido una estrategia para cubrir el vasto territorio de la República Argentina de elementos constitutivos del estado nacional, entre ellos la soberanía y el poder de policía. Sintéticamente, desde 1810 hasta 1853, el territorio heredado de lo que otrora fuera el Virreinato del Río de la Plata, fue controlado política y administrativamente de 2 maneras en una complicada combinación de mecanismos:

- **centralizado:** desde Buenos Aires donde se dominaban los recursos económicos, particularmente los provenientes de la aduana;
- **descentralizado:** a cargo de los caudillos provinciales quienes constituyeron además de verdaderos ejércitos

locales, organizaciones que cumplían el poder de policía en sus territorios.

En 1853 se dicta la Constitución Nacional donde se acuerda el sistema federal (Art. 1) como un principio fundamental para la administración territorial y política del país. Bajo el principio jurídico incluido en la Constitución se permite que las Provincias conserven "todo el poder no delegado por ella al Gobierno Federal" (Art. 121), reconociendo en éstas el derecho de darse "sus propias instituciones locales" (Art. 122) y admiten para sí la formación de cuerpos específicos destinados a la provisión de seguridad en sus territorios o su jurisdicción. Estos cuerpos especializados, denominados policías provinciales, iniciados ya en el siglo XX, se orientaban bajo el concepto de "seguridad pública" como una situación de seguridad general ligada a la idea de orden público.

El concepto de Foucault sobre la policía se aplica adecuadamente a esta realidad emergente cuando algo semejante a un poder político se ejerce sobre la comunidad. Asimismo, podemos ampliar esta orientación conceptual manifestando que, desde entonces, la policía se constituyó en el conjunto de medios a través de los cuales se pueden incrementar las fuerzas del Estado y simultáneamente mantener el orden en el territorio. Con respecto a la seguridad, podemos decir que ésta no se puede entender en abstracto sino situada en un determinado esquema Estado – Sociedad. Los problemas de seguridad se definen a partir de los cambios en la relación con lo nacional o local, en función del federalismo vigente. La seguridad aparece como una de las mayores preocupaciones en términos institucionales y sociales.

Los problemas consecuentes del aumento de la delincuencia y criminalidad como también la creciente vulnerabilidad frente a las "nuevas

amenazas" responden, entre otros factores, a la posibilidad de interacción entre la sociedad civil y el Estado en un marco democrático cambiante. Esto hace que la seguridad se convierta en una demanda concreta y actual, además de poner el tema en un estado deliberativo para que el mismo sea incorporado a las agendas gubernamental y pública.

2. Diversas modalidades institucionales en la gestión jurisdiccional de la seguridad en Argentina.

Entre las transformaciones recientes advertimos un incremento cuantitativo del delito y la violencia como también cambios de tipo cualitativo que han complejizado el universo del delito. En efecto, el delito y la violencia no pueden definirse unívocamente ya que son cualitativamente distintos de lo que eran con anterioridad. En síntesis, el universo de delitos tiene hoy manifestaciones más heterogéneas y diversas que en el pasado. Mientras tanto, los elementos y herramientas para enfrentar estas nuevas realidades desde las instituciones locales de policía se mantienen invariables.

Simultáneamente, la población, tanto a nivel nacional como de cada una de las provincias argentinas, define de manera diversa una imagen de estos procesos conducidos por el incremento del temor a ser víctima de un delito y a las perspectivas heterogéneas de las instituciones que gestionan jurisdiccionalmente la seguridad. La sensación de inseguridad, como fenómeno social es, además de un problema de percepción social de las instituciones, un problema, a nivel provincial, concerniente a la configuración institucional de los organismos de gestión de la seguridad en estos niveles. Puede entenderse entonces que la diversidad de la gestión provincial de la seguridad, obra como

causa eficiente de determinados comportamientos y pensamientos de los individuos, que son diversos en cada realidad provincial.

3. Realidades institucionales compartidas por las provincias argentinas en materia de gestión jurisdiccional de la seguridad.

En primer lugar, las provincias argentinas estudiadas comparten un marco democrático común para el desarrollo de sus estrategias de seguridad. Las instituciones que gestionan la seguridad en estas provincias aparecen como participantes todas ellas de sociedades democráticas. Ellas constituyen el primer eslabón en la cadena de actores de carácter estatal local encargados de hacer cumplir la ley. Estas instituciones mantienen para sí la posibilidad del uso de la fuerza pública, atribución que apunta a la mantención del orden y la seguridad como, así también, para resguardar el cumplimiento de las leyes.

En segundo lugar, el monopolio de la definición de las metas y estrategias de seguridad, históricamente a manos exclusivas de las policías, hoy no existe. La facultad de definir las situaciones en las cuales las policías deben intervenir dejó de ser un privilegio de los cuerpos policiales para ser una nueva dimensión civil en la cual nuevos actores institucionales, previstos en las leyes orgánicas de cada provincia, diseñan y deciden la orientación que las policías deben seguir.

En tercer lugar, la conducción institucional de la seguridad está en manos de civiles. Ya sea a partir de Ministerios de Seguridad y/o alguna otra función adherida, o bien como secretarías de estado dependientes directamente de los Gobernadores de provincia, quienes dirigen los procesos de diseño y creación de políticas son civiles. En relación directa del nuevo marco democrático en el que se desarrolla la gestión jurisdiccional de la seguridad, vemos que todas las organizaciones –partes innegables de las administraciones públicas provinciales– están a

cargo de civiles. Es decir que, si bien cada una de estas policías responde a jefes policiales, estos últimos se someten a la dirección política de civiles.

En cuarto lugar, la preocupación acerca de la inseguridad es compartida a nivel de la sociedad civil. Los cambios que se vienen operando a nivel internacional desde fines de los setenta y principios de los ochenta han transformado –entre tantas otras cosas– la situación de seguridad de la población. La aparición de la cuestión criminal en las agendas locales hace que la necesidad de una nueva institucionalidad, como también el diseño de políticas públicas de seguridad, sea reciente.

4. Realidades institucionales divergentes en la gestión jurisdiccional de la seguridad en las provincias argentinas.

Por contrapartida existen realidades diversas entre las provincias. Si bien han aparecido algunas tendencias institucionales convergentes, como, por ejemplo, los Ministerios de Seguridad provinciales y los nuevos cuerpos legales definen sus principios fundamentales o reglamentarios de manera muy variada, y en algunos casos esas definiciones son inexistentes, especialmente en aquellos donde las acciones están solamente regidas por leyes orgánicas policiales. En ciertos sentidos, la institucionalidad emergente es diversa de acuerdo con la preexistencia de leyes orgánicas policiales, que en algunas provincias, son de muy larga data. De no existir un acompañamiento de otro cuerpo legal más actualizado, es posible que las adaptaciones a las nuevas realidades emergentes en materia de seguridad sean difíciles.

Ministerios de alto rango o Secretarías de menor interés no expresan una posición común en materia de las búsquedas institucionales necesarias para enfrentar un problema común. La participación civil es un reconocimiento que responde a la heterogeneidad de los casos estudiados. La participación ciudadana emerge como un nuevo factor en la institu-

cionalidad existente en materia de la gestión jurisdiccional de la seguridad. La caracterización de la democracia participativa se efectiviza a partir de estas nuevas realidades emergentes.

5. Conclusiones Preliminares.

Podemos apreciar que en nuestras sociedades los planos real y legal no encuentran coherencia entre sí, en materia de seguridad pública. En teoría, “existe una legislación, un discurso y una organización del derecho público articulados en torno del principio de soberanía del cuerpo social”, pero no podemos presuponer que el surgimiento de la coerción institucional garantiza la afinidad del cuerpo social.

Por otra parte, podemos apreciar que el conjunto normativo vigente tanto a nivel federal como a nivel provincial contiene tanto complejidades en la gestión de la seguridad como también en la definición política de las instituciones provinciales encargadas de resguardar la seguridad y el orden público. Estas mismas consideraciones se pueden hacer con respecto a los objetivos de las instituciones policiales provinciales, a las estrategias de intervención como así también a las relaciones entre estas organizaciones y la sociedad civil.

Un carácter predominante en los casos de estudio es la presencia innegable de los civiles en la conducción política de las policías provinciales. Las policías han perdido “el monopolio” en la definición de las políticas de seguridad a favor de una mayor complejización de los sistemas de seguridad provinciales.

En la dimensión federal de la problemática, existen dificultades a la hora de definir no solo qué es una fuerza policial sino también cuál es el ámbito específico al que cada una de ellas (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, etc.) debe referenciarse. Todo depende de las definiciones que haga el decisor político de las oportunidades que condicionan el uso indistinto de una u otra organización del sistema federal de seguridad.

La carencia de definiciones institucionales y políticas, acordadas entre las provincias, acerca de conceptos esenciales en democracia como las policías y el rol compartido de ellas con los civiles en el Estado de Derecho, hace que la vida cotidiana, el transitar de los caminos y la percepción social emergente de las instituciones de control social sea diferente y por lo tanto, el respeto, la confianza y la visibilidad ciudadana de estas instituciones no tenga un denominador común.

REFERENCIAS

¹ Los casos estudiados son: Río Negro, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fé.

* Coordinador de la Licenciatura en Seguridad Instituto A.P. de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Villa María

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LOS CIUDADANOS TIENDEN A APOYAR SOLUCIONES AUTORITARIAS?²

Orlando J. Pérez, *

Este artículo está basado en los datos del Barómetro de las Américas 2004, 2006, 2008 y 2010, así como en un estudio reciente sobre la legitimidad política en América Latina que emplea datos de esa fuente correspondientes a 2004, realizado por John A. Booth y Mitchell A. Seligson.³ Si bien el trabajo señala a Honduras como un caso relevante, el Barómetro de las Américas 2004 ya detectó graves señales de alerta sobre la inestabilidad política en toda América Latina. Los autores examinaron las proporciones de ciudadanos que estaban "triplemente insatisfechos" como porcentaje de todos los ciudadanos en edad de votar versus aquellos que estaban "triplemente satisfechos". Los "triplemente satisfechos" eran los ciudadanos que se situaban por encima del punto medio de la escala (es decir, "satisfecho") en cada una de tres dimensiones clave de la legitimidad política, que son 1) apoyo a la democracia, 2) apoyo a las instituciones nacionales, y 3) evaluación del desempeño económico del gobierno de turno. El grupo de los "triplemente insatisfechos" estaba conformado por aquellos ciudadanos que caían por debajo del punto medio de la escala de legitimidad en esas mismas dimensiones claves.

Booth y Seligson habían comparado las proporciones de los triplemente insatisfechos con las de los triplemente satisfechos para cada país, lo cual, argumentaron, podría demostrar la propensión hacia la estabilidad política o el descontento. Su teoría no afirmaba que tener ciudadanos insatisfechos fuera en sí un problema para la democracia,

dado que la insatisfacción puede ser sana para ella. Más bien argumentaban que el equilibrio entre ciudadanos insatisfechos y satisfechos es lo que importa. Cuando los tiempos son malos y las críticas al sistema son numerosas, un sistema político democrático también necesita de ciudadanos que apoyen y que crean en la democracia, en las instituciones de la nación, y que no sean excesivamente críticos con el desempeño económico del gobierno. Cuando ese grupo está ausente, la estabilidad puede correr peligro.

Booth y Seligson encontraron que en 2004 por cada ciudadano hondureño triplemente satisfecho había 1.57 triplemente insatisfechos. En contraste, por cada costarricense triplemente insatisfecho había 12.5 triplemente satisfechos. Por lo tanto, Honduras en 2004 tenía casi 13 veces más ciudadanos con múltiples actitudes negativas de legitimidad que los que tenía Costa Rica en ese mismo momento. Los investigadores concluyeron que esta situación sugería fuertemente que ya en 2004 Honduras mostraba "un riesgo mayor de descontento, inestabilidad política y apoyo a regímenes antidemocráticos que los otros países, basándose en este indicador". Estos hallazgos mostraron ser consistentes con otros de la misma encuesta. Por ejemplo, encontraron que los hondureños justificaban un hipotético golpe militar mucho más que los ciudadanos de cualquier otro país de los que analizaron. De hecho, el 56.2% de la población en edad de votar hubiera justificado un golpe de estado.

Posteriormente, Seligson y Booth revi-

saron este mismo tema en un informe especial utilizando los datos de 2008 del Barómetro de las Américas y encontraron que la situación de gran insatisfacción en Honduras era mucho más extrema que en 2004. La proporción de hondureños triplemente insatisfechos pasó del 12% de 2004 a más del 31% de la población en edad de votar en 2008, y había seis veces más triplemente insatisfechos que triplemente satisfechos. Seligson y Booth interpretaron este desequilibrio como una señal muy clara de advertencia de que el riesgo de inestabilidad política en Honduras había aumentado entre 2004 y 2008.

Luego, en 2010, el Barómetro de las Américas ha explorado hasta qué punto, la crisis política del 2009 ha afectado las actitudes de los hondureños hacia su sistema político. A una serie de preguntas que miden las actitudes directamente relacionadas con la crisis política: ¿apoyaban los hondureños a principios de 2010 la salida del presidente Zelaya?, encontraron que el 58% de los hondureños en edad de votar se oponía a la destitución de Zelaya de la presidencia. Inclusive un 72% de los entrevistados en edad de votar expresaba su rechazo al exilio del Presidente Zelaya - acción explícitamente prohibida por la constitución.⁴

Los opositores al presidente Zelaya y algunos constitucionalistas han argumentado que las acciones de los militares no constituyeron un golpe de Estado. Los que están a favor de Zelaya, como también quienes están en su contra, dicen que fue claramente un caso de golpe inconstitucional e injustificable. ¿Cómo

se manifiesta el hondureño medio ante estas dos posiciones? Los resultados de la encuesta del Barómetro de las Américas revelan que la mayoría de hondureños cree que la destitución de Zelaya fue de hecho un golpe. Más del 61% dijo que las acciones llevadas a cabo por los militares el 28 de junio constituyeron un golpe de Estado. Sostienen esta posición incluso cuando amplias mayorías también expresaron su oposición a las reformas que buscaba Zelaya. De hecho, más del 70% de los hondureños se oponían a su propuesta de Asamblea Constituyente (al menos a principios de 2010) y más del 75% estaban en contra de la “consulta” que Zelaya hubiera querido llevar a cabo.

¿Qué pasó con los ciudadanos triplemente insatisfechos?

La destitución del presidente Zelaya, y las posteriores elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre de 2009 parecen haber sido catárticas para la población hondureña en términos de sus niveles de insatisfacción con la legitimidad de su sistema político en el periodo anterior al golpe. Para evaluar el peso relativo de los triplemente insatisfechos versus el resto de ciudadanos, Seligson y Booth (2009) construyeron un índice de insatisfacción triple, este le otorgó a los hondureños que se situaban por debajo de la media en todas las escalas de desempeño del régimen, apoyo a las instituciones y apoyo a los principios del régimen democrático una puntuación de 2, a aquellos que caían por encima de la media en todas ellas, una puntuación de cero y a aquellos con posiciones mixtas una puntuación de 1. Los resultados demuestran que a principios de 2010 la media nacional hondureña en el índice de triple insatisfacción había disminuido sustancialmente del pico observado en 2008, desde su punto más alto de 1.3 en 2008 a 1.0 en 2010. Este nivel era todavía mucho más alto que el encontrado en la vecina Costa Rica. Pero representaba un claro descenso desde el 2008.

Pero, ¿qué había cambiado específicamente?, ¿se habían vuelto los hondureños, en promedio, más democráticos?, ¿estaban más a favor de la institucionalidad, o más felices en cuanto al desempeño de su administración en el manejo

de la economía? Los resultados vistos en la perspectiva del tiempo revelan una recuperación de los componentes de legitimidad del régimen en 2010 después del golpe. El apoyo a los principios democráticos se recuperó ligeramente entre 2008 y 2010. El apoyo al desempeño económico, que de lejos es el componente más bajo de la triple insatisfacción, ascendió ligeramente entre 2008 y 2010 pero permaneció bajo (lo cual no es sorprendente, dado el retroceso económico mundial y los problemas particulares que enfrentó Honduras, como la reducción de la ayuda internacional y de parte de la inversión extranjera tras el golpe). La evaluación que más mejoró fue el apoyo a las instituciones, el cual incrementó casi 15 puntos después del golpe.

¿Cuáles fueron las fuentes de insatisfacción ciudadana con el gobierno en Honduras?

El análisis indica que las variables sociodemográficas tuvieron un impacto variable en los niveles de los triplemente insatisfechos a lo largo del tiempo. Se destaca que es la riqueza del entrevistado (medida por un índice de riqueza basado en la posesión de determinados bienes en el hogar) lo que contribuyó de manera significativa a la triple insatisfacción (los más ricos estaban menos insatisfechos) en 2004 y 2010, pero no en 2006 ni en 2008. Esto indica que los ricos y los pobres por igual estaban igualmente insatisfechos en los años inmediatamente anteriores al golpe de 2009, mientras que después del golpe los ricos volvieron a su posición de 2004 estando significativamente más satisfechos que otros hondureños. Para 2006 y 2010 el promedio de los niveles de triple insatisfacción eran generalmente más bajos a medida que los quintiles de ingreso se incrementaban. Las frustraciones de los ciudadanos se volvieron generales en toda la geografía y entre todos los estratos de riqueza antes del golpe de 2009.

¿Cuál ha sido la relación entre la clase económica de los hondureños y su posición frente al régimen en 2010, ocho meses después del golpe?

Observando los tres componentes del índice de triple insatisfacción, los datos han indicado que la riqueza no era un factor

significativo a la hora de explicar dos de los componentes de la variable triple insatisfacción, es decir las diferencias en el apoyo a los principios democráticos y a las instituciones. Sin embargo, la riqueza estaba relacionada de manera significativa con las evaluaciones de los ciudadanos sobre el desempeño económico del régimen. Esto proporciona apoyo adicional al argumento de que los ciudadanos estaban reaccionando al marcado populismo, y al cambio de sus políticas a favor de los pobres en la segunda mitad del periodo presidencial del Presidente Zelaya. En 2010, con la nueva administración en el poder, las élites apoyan el desempeño económico del régimen más que aquellos situados en los quintiles de riqueza más bajos. Los élites, sin embargo, expresaban más apoyo a los golpes de estado que los hondureños en los niveles inferiores de riqueza, lo que sugiere que el golpe resultó satisfactorio para los intereses de los hondureños más ricos, y reforzó sus opiniones de que políticas económicas impopulares pueden ser “curadas” por medios inconstitucionales. Tomando en cuenta la variable educación, se encontró que los hondureños más ricos expresaron mayor apoyo a los golpes de estado; al igual que los hondureños con niveles de educación más bajos. Estos resultados sugieren que la combinación de baja educación y alto nivel de riqueza puede ser letal para la democracia en Honduras, y tal vez en cualquier otro lugar.

Según los datos del Barómetro de las Américas, los hondureños eran los ciudadanos triplemente más insatisfechos en América Latina en 2008. En 2009, sufrieron una crisis política traumática. La evidencia que proporciona la encuesta del Barómetro de las Américas de 2010 llevada a cabo varios meses después del golpe y tras la elección del nuevo gobierno en noviembre de 2009 indica que el nivel de triple insatisfacción ha disminuido considerablemente en 2010. Nuestro análisis ha mostrado que las élites, definidas aquí como aquellos en los quintiles superiores de riqueza, eran los triplemente más satisfechos en 2010 y, tal vez no casualmente, los que apoyan los golpes de estado en mayor medida.

Conclusiones

Después de los tumultuosos eventos de 2009, la mayoría de hondureños percibió dichos acontecimientos como un golpe de Estado, y se opuso tanto al golpe como al exilio del presidente Zelaya de Honduras. Sin embargo, una amplia mayoría señaló oponerse al intento de consulta de Zelaya y a su propuesta de constituir una nueva Asamblea Constituyente. En 2004, la triple insatisfacción era mayor entre los pobres y menor entre los ricos, y mayor entre los habitantes de zonas rurales y ciudades pequeñas y menor entre los habitantes de las ciudades grandes. En 2006 y 2008 la triple insatisfacción llegó a estar ampliamente generalizada en todos los niveles de riqueza y en las zonas urbanas.

Algo muy similar sucedió con la justificación de golpes de Estado a lo largo del tiempo. Así, con independencia del papel predominante de las élites nacionales como presuntos arquitectos del golpe de Estado, los hondureños de todos los espectros sociales llegaron a estar am-

pliamente descontentos en 2006 y 2008. Esto probablemente creó una atmósfera en la que las élites políticas podrían considerar que llevar a cabo un golpe de Estado sería mucho más fácil. A raíz del golpe, el apoyo a las instituciones creció ampliamente y la evaluación del desempeño económico mejoró también. El apoyo de los hondureños a los principios del régimen democrático, sin embargo, se ha recuperado muy poco en 2010 del terreno perdido entre 2006 y 2008. Esto indica que el apoyo a los principios básicos democráticos permanece en los niveles anteriores al golpe, presentando una potencial amenaza para la estabilidad de la gobernabilidad democrática.

La consolidación democrática a menudo se describe como la condición que prevalece una vez que los ciudadanos y las élites de una nación han adoptado de manera generalizada las normas democráticas y expresan un compromiso con las normas constitucionales democráticas como "el único juego posible". Sea cual sea el efecto catártico que el

golpe de 2009 pudiera haber tenido, sean cuales sean las ideas reconsideradas de los ciudadanos sobre lo que pasó, los hallazgos de la encuesta del Barómetro de las Américas de 2010 en Honduras ofrecen poca evidencia de que los hondureños, y en especial las élites hondureñas, vean la democracia como "el único juego posible".

REFERENCIAS

² Este artículo es un resumen del trabajo: Orlando J. Pérez, John A. Booth & Mitchell A. Seligson, "La "catarsis" hondureña" Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2010 (No.45), Universidad de Vanderbilt (<http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/10845es.pdf>).

³ John A. Booth y Mitchell A. Seligson, *The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political Support and Democracy in Eight Nations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

⁴ La muestra de 2010 consta de 1.596 personas seleccionadas empleado un diseño muestral estratificado multietápico para representar las 9 diferentes regiones geográficas de Honduras.

*Orlando Pérez es politólogo, profesor y jefe del departamento de Ciencias políticas de la Central Michigan University, John A. Booth, University of North Texas y Mitchell A. Seligson, Vanderbilt University.

REPORTAJE: Crisis mundial e incremento de la transferencia internacional de armas.

Bertha García Gallegos* / Sol Espinosa Villagómez**

I. Un problema para la paz mundial.

En una nota de prensa de marzo de 2010 el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicó nueva información sobre la Transferencia Internacional de Armas en el mundo, que ocurre precisamente dentro de un clima de tensiones sociopolíticas globales. Paul Holtom, Director del Programa de Transferencia de Armas del SIPRI señala que 'la transferencia de armas hacia Sudamérica se incrementó en 150% durante los últimos cinco años, en comparación al inicio del milenio, reflejando una continuación del alza tanto en gasto militar como en órdenes de compra de armas en la región.⁵

Las aeronaves de combate conformaron el 27% del volumen de la transferencia internacional de armas durante el periodo 2005 - 2009. Las órdenes de compra y entregas de estos sistemas bélicos, potencialmente desestabilizadores, han generado inquietud por una posible carrera armamentista en las siguientes regiones: Medio Oriente, Norte de África, Sudamérica, Sur y Sureste de Asia. Entre los datos sobresalientes destacan:

- El volumen promedio de transferencia de armas en el mundo durante los años 2005-2009 fue 22% más alto que en el periodo 2000-2004.

- Las regiones que recibieron más armas en el periodo 2005-2009 fueron Asia y Oceanía (41 %), seguidas de Europa (24 %), Medio Oriente (17 %), las Américas (11 %) y África (7 %).

- Los Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador de equipo militar. Durante el periodo 2005-2009, el 39% de los envíos de este país fue recibido por Asia y Oceanía y el 36% por el Medio Oriente.

- Entre 2005-2010 los envíos de aeronaves de combate constituyeron el 39% del volumen total de envíos de armas convencionales por parte de los Estados Unidos, así como el 40% de los envíos Rusos.

A pesar de la crisis financiera global, en 2009 se incrementó el gasto real en casi un 6 por ciento en comparación con el 2008. Estados Unidos es el país que más gasta en armamentos, principalmente, por su participación en la guerra de Afganistán. Pero China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, India y Brasil no se quedan atrás y también

han tenido gastos importantes.⁶ El gasto militar durante el 2009, no formó parte de las medidas para estimular la crisis pero parece haber sido una manera de paliar la recesión económica, al menos ningún país en crisis lo recortó. El incremento del gasto militar está estrechamente ligado a la situación en Irak y Afganistán, y la tensión producida por estas guerras ha ejercido un efecto contaminador hacia el resto del mundo por las suspicacias que levanta el enorme poder bélico de los Estados Unidos.

En América latina aumentó significativamente el gasto militar. América Central, con México y el Caribe incluidos, hizo inversiones por 5.600 millones de dólares en el 2009, un 9,7% más que el año anterior. América del Sur en su conjunto destinó 51.800 millones al área de defensa, lo que significa un 7,6% más que en el 2008. Mientras tanto, expertos de la UNESCO afirmaron en 2009 que, con el equivalente a tres días sin inversión militar, sería posible proporcionar educación básica a 75 millones de menores. Alrededor de 70 países no alcanzarán la Educación Primaria Universal propuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para el año 2015.⁷

II. Hacia un Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales.

En un artículo sobre este tema, Roberto García Moritán, del Instituto Real Elcano de España⁸ comenta que "el armamentismo en todas sus formas y manifestaciones es una de las cuestiones que más incide en la percepción de seguridad de los Estados, en particular las armas de destrucción masiva. La escalada en las adquisiciones de armamento convencional constituye hoy una fuente de preocupación de todas las regiones del mundo y es una materia que afecta directamente la estabilidad y el balance del poder regional".

Siguiendo con el autor, las características actuales del comercio de armas requieren atención urgente por diversos motivos. La propia dinámica de ese comercio adquirirá una mayor intensidad, dado que las áreas de producción industrial de esos productos se irán expandiendo. Igualmente lo hará el desvío de armas al mercado ilícito vinculado al terrorismo, crimen organizado y toda variedad de actividades delictivas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha logrado controlar ese dinamismo y el comercio de armas ha continuado desarrollándose con absoluta impunidad.

Este panorama ha llevado a que la Asamblea General de las Naciones Unidas, inicie la preparación de un Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales y prepare una Conferencia para el 2012. Hasta aquí, las Naciones Unidas han adoptado dos instrumentos dirigidos a promover la transparencia en cuestiones militares y en las transferencias de armas convencionales: el Instrumento normalizado de las Naciones Unidas de presentación de informes sobre gastos militares de 1980 y el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas de 1991. Ninguno de estos esfuerzos encaraba el problema central del comercio de armas. La intención actual es que un Tratado al respecto se constituya en una norma jurídicamente vinculante capaz de fortalecer los mecanismos de control y regulación del comercio de las armas convencionales en el mundo.

REFERENCIAS

⁵ El Programa de Transferencia de Armas de SIPRI, monitorea, mide y analiza las transferencias internacionales de armas convencionales. Su base de datos es la fuente de información pública más integral en este tema desde 1950 y es totalmente accesible a través de la siguiente dirección electrónica: <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>

⁶ Berezán Eduardo "Un mundo con más armas" Junio 2010 <http://observadorglobal.com/un-mundo-con-mas-armas-n7866.html#comentarios#comentarios>

⁷ Berezán, Loc. Cit.

⁸ García Moritán Roberto ARI 108/2010 - 23/06/2010 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari108-2010

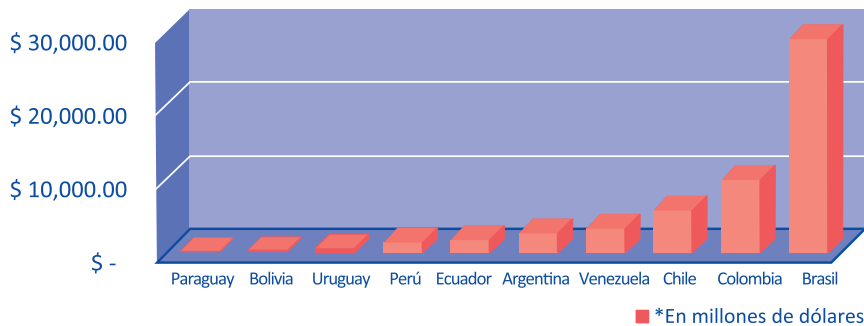
* Directora de DSD. ** Investigadora DSD

Fuente: Portal Sociopolítico Nueva Mayoría
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=30

Gasto Militar en América Latina durante el año 2009

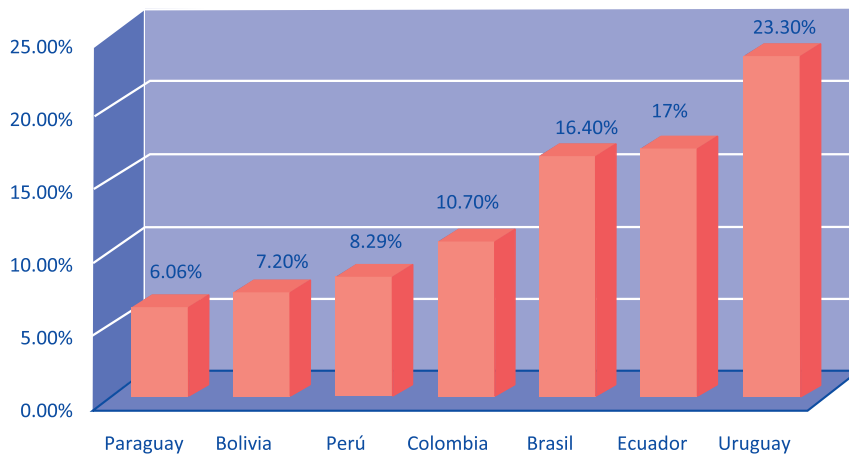
Países	Incremento del Gasto Militar en millones USD con relación al 2008	Monto Total del Gasto Militar en millones USD
Paraguay	8,00	140
Bolivia	18,00	268
Uruguay	95,00	496
Perú	115,00	1.502
Ecuador	273,00	1.821
Colombia	979,00	10.055
Brasil	3.822,00	29.124
Disminución del Gasto Militar en millones USD con relación al 2008		
Argentina	182,00	2.608
Chile	299,00	5.683
Venezuela	1.075,00	3.254

* Los gastos de Defensa se calculan según el PIB de cada nación en millones de dólares



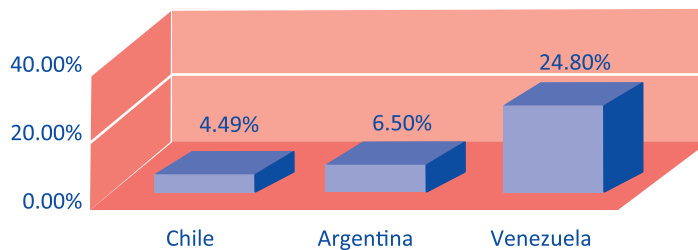
Gasto Militar en Sudamérica por países en el 2009

Fuente: Portal Sociopolítico Nueva Mayoría
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=30



Porcentaje del Incremento del Gasto Militar en Sudamérica en el 2009 con relación al 2008

*Incremento en millones de dólares
Fuente: Portal Sociopolítico Nueva Mayoría
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=30



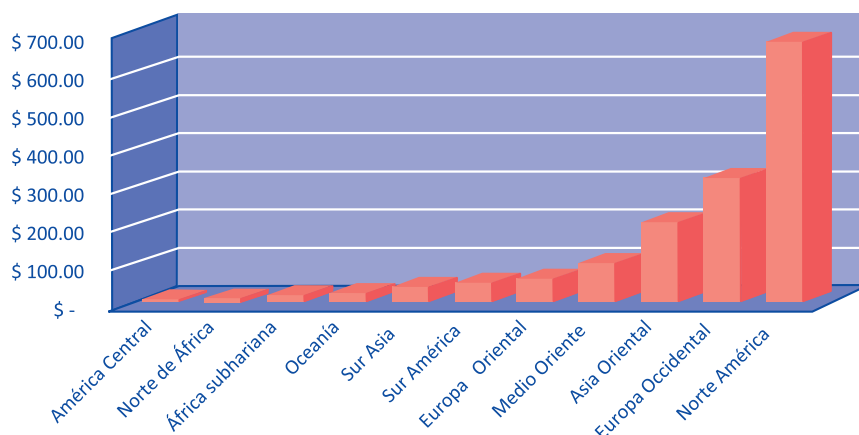
Porcentaje de Disminución del Gasto Militar en Sudamérica en el 2009 con relación al 2008

Fuente: Portal Sociopolítico Nueva Mayoría
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=30

Región	Gastos Militares
América	\$ 738,00
América Central	\$ 5,60
América del Norte	\$ 680,00
América del Sur	\$ 51,80
Europa	\$ 386,00
Europa Oriental	\$ 60,00
Europa Occidental y Central	\$ 326,00
Asia	\$ 255,60
Asia Oriental	\$ 210,00
Asia del Sur	\$ 44,00
Medio Oriente	\$ 103,00
África	\$ 27,40
Norte de África	\$ 10,00
África subhariana	\$ 17,40
Oceanía	\$ 20,40
Gasto Mundial	\$ 1.531,00
* Montos en billones USD	
* Los gastos de Defensa se calculan según el PIB de cada nación	

Gasto Militar Mundial por Regiones durante el 2009

Fuente: Informe SIPRI YEARBOOK 2010 (Stockholm International Peace Research Institute).
<http://www.sipri.org>



Gasto Militar Mundial por Regiones en el 2009

Fuente: Informe SIPRI YEARBOOK 2010 (Stockholm International Peace Research Institute).
<http://www.sipri.org>

OBSERVATORIO POLÍTICO, DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Bimestre: mayo-junio 2010

María Sol Espinosa Villagómez

El Observatorio Político Defensa, Seguridad Pública y Ciudadana da seguimiento a los acontecimientos más importantes que competen a las instituciones de Seguridad. En el período mayo-junio del 2010 se resaltaron los siguientes temas de análisis e información.

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA

Control de Armas: Compañías de seguridad deben tramitar permisos en Ecuador.- Desde enero del 2010, las personas jurídicas y compañías de seguridad deberán tramitar la recalificación de las autorizaciones para portar armas, para ello las empresas deberán estar al día en sus obligaciones tributarias. Los guardias privados sí podrán portar las armas que han sido recalificadas por la Policía. Diario Hoy 03/05/10.

Armas ilegales son decomisadas.- En total, 1 246 armas de fuego han sido decomisadas desde hace un año, cuando se creó la Unidad Técnica de Control de Armas (UTCA). Se estima que 8 917 compañías de seguridad han emitido solicitudes para registrar más de un millón de estos artefactos y obtener el permiso de recalifica-

ción necesario para portar las mismas. Mientras tanto, 1819 personas naturales se sometieron a pruebas psicológicas y prácticas. Diario Hoy 31/05/10.

Gobierno pide a la Policía mayor agilidad en procesos de auto juzgamiento.- El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, pidió a la Policía Nacional que, respetando el debido proceso, actúe con agilidad e informe sobre los resultados de las depuraciones que realizan para sacar de las filas a los miembros juzgados por mal comportamiento. Diario La Hora 04/05/10

El ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, acusado de encubrimiento en red de narcotráfico, fue exonerado dentro del caso "Huracán de la frontera".- La sentencia del caso fue redactada en el Tribunal Segundo Penal de Esmeraldas. 18 personas fueron procesadas, entre ellas los hermanos Edison, Miguel y Jefferson Ostaiza. Los Ostaiza fueron condenados a 12 y 6 años de reclusión mayor por tenencia ilícita y tráfico de droga. El Comercio 13/05/10.

Nuevo proceso de modernización de la Policía Nacional.- El ministro Gustavo Jalkh afirmó que se impulsa un proceso de modernización y de reforma institucional dentro de la Policía Nacional, con el objetivo de crear nuevos meca-

nismo de trabajo y equipamiento, además de una doctrina policial moderna. El Ministro dijo que si bien en anteriores años se vio un incremento en los índices de criminalidad, se espera que en el 2010 se reduzcan en un 16%. Aseguró que se están buscando los mecanismos para que haya una mejor cooperación interinstitucional entre la Policía Judicial (PJ) y la Fiscalía. Diario Hoy 31/05/10

Indígenas ecuatorianos son llevados a juicio por terrorismo.- Luis Guerrero, Carlos Pérez, Reinando Arpi, Ángel Guzmán, Pablo Quezada e Isaac Lozano fueron detenidos durante la protesta indígena en Azuay contra la Ley de Agua y llevados al Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, luego de que el Fiscal de Garantías Penales, Guillermo Neira, les dictara orden de detención. Finalmente, los cinco implicados recuperaron su libertad. Sin embargo, en su contra se mantiene la acusación de terrorismo, sabotaje a los servicios públicos, agresión a vehículos y policías; por lo cual podrían tener una pena de hasta 12 años de cárcel, informó su abogado, Luis Guerrero, al desmentir las acusaciones.

Medidas de seguridad para combatir el sicariato en el Ecuador.- El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, anunció que las medidas para combatir

el sicariato incluirán el incremento de requisas de armas, controles a motociclistas además de estímulos y pago de recompensas. Diario El Universo 01/06/10.

Policías de Colombia y Francia asesoran a sus pares de Ecuador.- La colaboración de expertos internacionales de Francia y Colombia se dará en las áreas de inteligencia, lucha contra el crimen organizado y antinarcóticos. Diario El Universo 01/06/10.

Informe final de la Policía Colombiana sobre el delito del sicariato en el Ecuador.- El ministro del Interior ecuatoriano recibió un informe de los oficiales de la Policía Colombiana sobre el asesoramiento brindado durante quince días a la Policía ecuatoriana sobre el sicariato. El informe recalzó la importancia del trabajo interinstitucional (Fiscalía, Judicatura y Policía Judicial), así como una mayor articulación entre las autoridades (gobernadores-alcaldes-jueces y policías) para lograr eficacia en las acciones contra la delincuencia. Diario El Universo 26/06/10.

Reformas al Código penal contemplarán los delitos de sicariato y usura.- Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, dijo que se está preparando una propuesta para reformar integralmente el sistema penal del país, dentro de la cual se van a contemplar los delitos de sicariato y de usura, con un enfoque mucho más integral. Se está organizando una comisión técnica para definir el tema de reducción de penas. Diario El Comercio 18/06/10.

Justicia Indígena es vista por la Fiscalía como tortura, mientras Indígenas la defienden. El 11 de mayo en Zumbahua, provincia de Cotopaxi, Marco Antonio Olivo fue asesinado. Los presuntos implicados en el crimen fueron condenados por la justicia indígena de la comunidad de La Cocha, ubicada en la misma provincia, a recibir latigazos de ortiga y baños de agua fría. Sin embargo, la decisión indígena fue sancionada por la Justicia Ordinaria y los medios de comunicación nacional e internacional. Los presuntos implicados denunciaron que en ausencia del fiscal Indígena

de Cotopaxi, Vicente Tibán, fueron retenidos ilegalmente por siete días, tiempo en el cual recibieron maltratos y torturas de diversa índole. Diario virtual Ecuador Inmediato 28/05/10.

La justicia indígena entra en conflicto con la justicia ordinaria.- Para Lourdes Tibán, asambleísta indígena el caso de la Cocha fue politizado y usado como mecanismo de persecución al movimiento indígena. Alegó que los delitos cometidos en las comunidades indígenas son conflictos internos que deben ser sancionados por los dirigentes porque se supone que estos hechos no afectan a una sola persona, sino a todo el conglomerado. Diario El Comercio 19/06/10.

La Comisión de la Verdad entrega informe final al Gobierno.- La Comisión de la Verdad, conformada para investigar la actuación del gobierno de León Febres Cordero (1982-1986) en Derechos Humanos, informó que 385 personas fueron sometidas a 25 tipos de tortura, las cuales consistían en descargas eléctricas en los genitales, privación de alimentos y de sueño por medio del rastrillado de armas. Las instalaciones militares y policiales fueron los sitios más frecuentes para torturar. En 25 años, 295 personas fueron agredidas en 27 instalaciones de las FF.AA. De ellos, 100 casos se produjeron en 22 cuarteles del Ejército, igual número en cuarteles o dependencias administrativas de la Policía Nacional, 82 en dos repartos de la Fuerza Aérea y 13 en oficinas de la Marina. Diario El Comercio 13/06/10.

Para algunos analistas La Comisión de la Verdad ecuatoriana 'olvidó' algunos casos más recientes.- Uno de estos es el llamado caso Dayuma, en el cual fueron detenidas y acusadas de terrorismo 23 personas y la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori. El informe tampoco incluyó otros casos relacionados a las actividades petrolera y minera, focalizados en las provincias de Orellana y El Oro. Una dirigente campesina fue amenazada de muerte por las empresas mineras que operaban en la zona de Tenguel. Los hechos aún no han sido aclarados. El empresario minero, Manuel Serrano, de la provincia de El Oro

denunció el hostigamiento de uniformados, además agregó que cerca de sus propiedades, en donde hasta 2005 tuvo concesiones mineras, han sido encontrados este año restos de cadáveres descuartizados. Diario El Comercio 20/06/10.

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD.

Evaluación del "Plan Ecuador" Treinta y ocho meses después de su nacimiento en abril de 2007, el futuro del Plan Ecuador, creado para hacerle frente a los efectos del Plan Colombia, es incierto. De los resultados de los últimos seis meses depende la continuación del Plan, que en su página Web precisa que en este año ha invertido 1'509.327 dólares en Esmeraldas; 761.974 en Carchi y 1'126.526 en Sucumbíos. En enero pasado, el presidente Correa les dio seis meses a los directivos del organismo regional para que reportaran mejoras en la ejecución de proyectos de seguridad y desarrollo social con un presupuesto de 135 millones de dólares. Diario Expreso 20/06/10

MINISTERIO DE DEFENSA

Encuentran irregularidades en los contratos de póliza de seguros de aeronaves de las Fuerzas Armadas.- La auditoría al proceso de contratación de la póliza de seguros de las aeronaves de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con la estatal Seguros Sucre, ordenada por el Ministro de Defensa, registró algunas anomalías. Una de ellas es la "diferencia de precio" de \$ 353.931,73 en la póliza del 2009 contratada con Sucre, respecto de la oferta que había presentado en ese entonces la firma Interoceánica, pese a que las condiciones eran idénticas para ambas aseguradoras. El Universo 17/05/10.

Ecuador fue séptimo en gasto militar dentro de la región.- El informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), ubicó a Ecuador en el puesto 7 de los países de América Latina con más gasto militar en el 2009. Destinó 1.821

millones, lo que representó una subida del 18% respecto del año pasado. Brasil encabeza la lista con 27.124 millones de dólares (16% más), le siguen Colombia que tuvo un incremento del 11% (10.055 millones de dólares respecto al 2008) y Chile, tuvo una disminución del 4% en sus gastos con relación al 2008. Sin embargo, este país es el tercero en la lista con una inversión de 5.683 millones de dólares. Diario Expreso 02/06/10.

RELACIONES ECUADOR - COLOMBIA

El 98,4% de refugiados en Ecuador tiene nacionalidad colombiana.- En Ecuador existen 52 377 extranjeros en calidad de refugiados. De ese total, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 51 555 son de nacionalidad colombiana, es decir el 98,4 % de la población. Desde el 2002 hubo un "recrudescimiento" del conflicto armado en Colombia y eso motivó la emigración masiva. Diario El Comercio 05/15/10.

Cancillería ecuatoriana se muestra mesurada ante triunfo de Juan Manuel Santos en primera vuelta de las elecciones colombianas. El gobierno de Rafael Correa cuestionó duramente al ataque de Angostura, que Santos como ministro de Defensa dirigió. Pese al contundente triunfo de Santos (obtuvo 46,5% de los votos frente al 21,5% de su contendor Antanas Mockus), Ecuador prefirió no pronunciarse y mantenerse cauto en el tema. Diario El Comercio 01/06/10.

Juan Manuel Santos, nuevo presidente de Colombia.- El presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que espera llevar al país al liderazgo regional y anunció a los mandatarios de América Latina que en su Gobierno encontrarán un aliado y un socio comprometido. En su primer discurso no especificó países ni gobiernos, aunque en su campaña expresó la necesidad de mejorar las relaciones con sus vecinos Venezuela y Ecuador y mantener a Estados Unidos como el mejor aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Diario El Comercio 20/06/10.

RELACIONES ECUADOR - ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos espera acuerdo para aumentar ayuda hacia las FF.AA. Ecuatorianas.- La Embajada de Estados Unidos, por intermedio del Grupo Militar, entregó a las Fuerzas Armadas una donación de equipos de última generación para mejorar las operaciones militares en la frontera con Colombia y contrarrestar el narcotráfico. La colaboración asciende a \$ 1,2 millones provenientes del presupuesto del Comando Sur. Diario El Universo 05/05/10.

En suspenso la cooperación militar de Ecuador con EE.UU.- Ecuador y Estados Unidos no logran concretar un acuerdo para formalizar e incrementar la cooperación en seguridad y defensa, pendiente y en negociaciones desde octubre del 2009. La embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, aclaró que espera la firma de una nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores que garantice la seguridad de sus soldados durante las operaciones combinadas que realicen en territorio ecuatoriano. Diario El Universo 13/06/10.

EE.UU. estrena capacitación militar combinada en el Ecuador.- El primer curso organizado por Estados Unidos en América Latina de entrenamiento combinado para la capacitación de oficiales y personal de tropa concluyó en el Fuerte Militar Atahualpa, en Machachi. Cuarenta y dos uniformados del Ejército, Marina y Aviación recibieron durante seis semanas adiestramiento académico, motivación y liderazgo, entre otros, de los instructores estadounidenses. Diario El Universo 18/06/10.

EE.UU. afirma que el Ecuador no cumple estándares mínimos en la lucha contra el tráfico de personas.- El Departamento de Estado difundió un informe sobre la situación de la lucha contra el tráfico de personas según el cual Estados Unidos está entre los países que más cumplen los estándares internacionales, Cuba en el peor lugar y Venezuela bajo la lupa. Las naciones de América Latina

como es el caso de Ecuador aparecen en su mayoría en el "renglón 2" como aquellos que "no cumplen con los estándares mínimos pero están haciendo significativos esfuerzos" para ponerse a la altura de esas exigencias. Diario El Comercio 14/06/10.

ECUADOR EN LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA UNASUR

El ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, fue designado como Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas.- Su designación no se dio por unanimidad durante la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado de este organismo realizada en Buenos Aires. La esposa de Kirchner y actual mandataria argentina, Cristina Fernández, se abstuvo de votar. Los cancilleres de Perú, Colombia, Surinam y Guayana votaron a favor de su nominación. Diario El Comercio 05/05/2010.

UNASUR aprobará plan de seguridad y confianza militar.- La UNASUR, cuyos socios Brasil y Colombia mantienen acuerdos militares con Estados Unidos, aprobará una estrategia regional de seguridad y confianza. El texto "reviste particular importancia porque es la conclusión de un proceso de estudio" iniciado en septiembre pasado por mandato de la cumbre de Bariloche (Argentina), en la que los presidentes sudamericanos mostraron preocupación por la alianza Bogotá-Washington. Diario Hoy 05/05/10.

El Consejo de Defensa Suramericano crea el Centro de Estudios Estratégicos.- El estatuto que le da vida a esta nueva entidad explica que tendrá su sede en Buenos Aires, Argentina. Será la encargada de promover la elaboración de una visión compartida sobre las amenazas en los países agrupados en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Contribuirá a la identificación de enfoques conceptuales y lineamientos básicos, que permitan la articulación de políticas de defensa y seguridad. Diario El Comercio 09/05/10.

RELACIONES ECUADOR - GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

La salida de Ecuador de la lista negra del GAFI no está en el documento oficial.- En el apartado sobre Ecuador, el GAFI reconoce que en este mes, el país hizo un compromiso de alto nivel político con el GAFI para tratar las deficiencias estratégicas, pero a ningún momento especifica que se le ha retirado de la lista de países con poca colaboración en la lucha de lavado de activos. El GAFI ha determinado que ciertas deficiencias aún permanecen, por lo que Ecuador trabajará en implementar un plan de acción para criminalizar el lavado de

activos y financiamiento al terrorismo. Diario El Comercio 26/06/10

SEGURIDAD AMBIENTAL

Fideicomiso de ITT se firmará en el Parque Nacional Yasuní.- El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, aseguró que el fideicomiso para garantizar el proyecto que busca mantener en tierra el petróleo del campo Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), está virtualmente listo. Según Mera, sólo falta que los miembros del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirmen su presencia en Ecuador para firmar el documento. Diario La Hora 01/05/10.

La minería entra en la agenda de las protestas.- El movimiento indígena exige que se incluya el tema de la minería a la protesta por la Ley del Agua. Las comunidades se oponen a las concesiones que estén cerca de las fuentes de agua. En el informe para primer debate de la Ley del Agua se estipulaba que una concesión minera tiene que estar a 1.500 metros a la redonda de una fuente de agua. Pero esa disposición se eliminó, dejando abierta la posibilidad de concesiones mineras junto a las fuentes. Además, se eliminaron las sanciones en contra de quienes contaminen las fuentes de agua. Diario Expreso 10/05/10.

* Investigadora DSD



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Berenice Cordero

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Perterra – Real Instituto Elcano (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dr. Raúl Benítez Manaut – UNAM

Investigadora:

- María Sol Espinosa

Programa: Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1582 / (593-2) 299 1700 ext. 1124

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: solespinosa86@gmail.com